

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
SALA DE ORALIDAD

Auto Interlocutorio

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00830-00
Medio de control: Protección de Derechos e Intereses Colectivos
Demandante: Juan Pablo Mosquera Mora
(juanpablo8706@hotmail.com)
Demandados: Distrito de Santiago de Cali
Concejo Distrital de Santiago de Cali
Empresas Municipales de Cali EICE (Emcali)
Corporación Autónoma Regional del Valle Cauca
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Vivienda
Fondo de Adaptación
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter)
Unión Temporal Espacio Público Aguablanca
Curaduría Urbana 1 de Santiago de Cali
Curaduría Urbana 2 de Santiago de Cali
Curaduría Urbana 3 de Santiago de Cali
Alianza Fiduciaria S.A.
Constructora Enlace
Constructora IC Prefabricados
Comfandi
Comité de Planificación de la Comuna 13
Junta Administradora Local de la Comuna 13
Personería Distrital de Cali para Asuntos Ambientales
Procuraduría para Asuntos Ambientales

Santiago de Cali, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

1. Por reparto del 21 de septiembre de 2022, a este Despacho le correspondió el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos promovido por Juan Pablo Mosquera Mora contra el Distrito de Santiago de Cali, Empresas Municipales de Cali EICE (Emcali), la Corporación Autónoma Regional del Valle Cauca, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, el Fondo de Adaptación, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter), la Unión Temporal Espacio Público Aguablanca, la Curaduría Urbana 1 de Santiago de Cali, la Curaduría Urbana 2 de Santiago de Cali, la Curaduría Urbana 3 de Santiago de Cali, la Alianza Fiduciaria S.A., la Constructora Enlace, la Constructora IC Prefabricados, Comfandi, el Comité de Planificación de la Comuna 13, la Junta Administradora Local de la Comuna 13, la Personería Distrital de Cali para Asuntos Ambientales y la Procuraduría para Asuntos Ambientales.

2. En primer lugar, la parte actora se refiere a la temática relacionada con la «*Política Pública Nacional de Humedales Interiores de Colombia*» (**primera temática**). Los reproches que se plantean en esta temática son los siguientes:

- Que el departamento administrativo de planeación del distrito de Santiago de Cali, mediante Resolución 4132.0.21-626 del 2016 y con el argumento de estar corrigiendo una imprecisión cartográfica, eliminó la condición de zona verde y de espacio público al predio ubicado la carrera 27G entre calle 72R y calle 72U del Barrio Rodrigo Lara Bonilla, para darle la connotación de área de actividad residencial (conducta con la que habría desconocido el artículo 190 del Decreto 019 del 2012).
- Que el Concejo de Santiago de Cali desafectó una franja de 100 metros alrededor del Humedal El Pondaje y luego, mediante Acuerdo 0373 de 2014, clasificó el área de Recuperación Ambiental y Uso Sostenible del Humedal el Pondaje y Charco Azul como áreas para vivienda de interés social y prioritario (conducta con la que habría desconocido el artículo 6 de la ley 9 de 1989).
- Que el Distrito de Santiago de Cali vendió el predio que había sido cedido como zona verde de la Urbanización Los Lagos, sin hacer el correspondiente canje (conducta con la que habría desconocido el artículo 6 de la ley 9 de 1989).
- Que Emcali vendió al distrito de Santiago de Cali el predio donde está ubicado el polideportivo La Paz, con el fin de que se adelantara un proyecto urbanístico, pero ello agravaría el déficit de espacio público y zona verde en el barrio Rodrigo Lara Bonilla.
- Que los propietarios del proyecto de urbanización La Paz (que luego se erigió en el barrio Rodrigo Lara Bonilla) no realizaron la cesión gratuita de zona verde, ausencia que se mantiene a la fecha.
- Que Emcali no ha culminado el proyecto del colector de desviación del canal oriental en el barrio Rodrigo Lara Bonilla.

3. En segundo lugar, Juan Pablo Mosquera Mora se refiere a la temática relacionada con el «*Mejoramiento Integral de Barrios*» (**segunda temática**). Reprocha el hecho de que no se haya podido construir el parque del proyecto MIB – Corazón Distrito de Aguablanca, en atención a que ese predio es de propiedad de Emcali y esa empresa había manifestado que ese terreno está destinado para un propósito distinto: desarrollar el proyecto de desviación del colector oriental.

4. En tercer lugar, el demandante alude a la temática que denominó «*Derechos de Petición*» (**tercera temática**). En esta temática se exponen las siguientes circunstancias:

- Que, el 16 de abril del 2020, presentó derecho de petición al Departamento Administrativo de Planeación del distrito de Santiago de Cali, en el que solicitó: i) los estudios técnicos de la Resolución 4132.0.21-626 del 2016, la declaratoria de nulidad de la Resolución 4132.0.21-626 del 2016 y iii) la nulidad de las licencias de construcción del proyecto urbanístico Torres de La Paz. Que ese derecho de petición fue remitido por competencia al

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), que emitió una respuesta frente a la petición.

- Que, el 27 de octubre de 2021, presentó derecho de petición ante el Dagma, en el que solicitó el cumplimiento del parágrafo 4 del artículo 87 del Acuerdo 0373 del 2014 y, por consiguiente, los usos de suelo establecidos en el plan de manejo ambiental del humedal El Pondaje. Que no se ha dado respuesta de fondo a esa petición.
- Que, el 27 de octubre de 2021, presentó derecho de petición ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para que dieran cumplimiento a la Política Pública Nacional de Humedales de Colombia. Que no se ha dado respuesta de fondo a esas peticiones.
- Que, el 28 de septiembre de 2020, presentó derecho de petición ante la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali que, en el marco de la política pública de mejoramiento integral de barrios, tuviera en cuenta las problemáticas del Barrio Rodrigo Lara Bonilla en el proyecto MIB- Corazón Distrito de Aguablanca.
- Que, el 8 de julio de 2021, consultó a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali y a la Unión Temporal Espacio Público Aguablanca cuáles fueron las necesidades que se diagnosticaron en el Barrio Rodrigo Lara Bonilla con relación al medio ambiente y equipamientos deportivos.

5. A partir de la anterior descripción, se destaca que las dos primeras temáticas parecen sugerir discusiones en las que sí están involucrados derechos e intereses colectivos¹, por lo que, en principio, sí sería procedente el medio de control al que acude el actor. Sin embargo, a juicio del Despacho, la vulneración y/o amenaza de derechos e intereses colectivos se estaría atribuyendo únicamente al Distrito de Santiago de Cali, a Emcali y a los propietarios del proyecto de urbanización La Paz (que luego se erigió en el barrio Rodrigo Lara Bonilla), pero no se infiere claramente cuál es la razón por la cual se incluye como demandadas a las demás sociedades y entidades.

6. Si bien en la tercera temática se alude a la ausencia de respuesta frente a derechos de petición, lo cierto es que ello caería en la órbita de un derecho fundamental, de carácter individual, cuyo medio de protección procedente sería la acción de tutela, y no el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

7. No obstante, es posible que esas peticiones tuvieran como único propósito agotar requisitos de procedibilidad para acudir a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos (el inciso final del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011²) o de cumplimiento de normas con fuerza

¹ Goce del espacio público, goce de ambiente sano y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

² ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. (...)

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro

material de ley o de actos administrativos (inciso 2° del artículo 8 de la Ley 393 de 1997³).

8. Y es que las peticiones que presentó el actor el 27 de octubre de 2021 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el Dagma y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible tenían el siguiente asunto «*solicitud de cumplimiento de acto administrativo con fuerza de ley*».

9. En esas condiciones, y en vista de que la inclusión o exclusión de las demás entidades demandadas tiene incidencia en la determinación de la competencia funcional para conocer el asunto, se hace necesario requerir a la parte demandante para que explique cuál es la vulneración o amenaza de derechos colectivos que se atribuye a la Corporación Autónoma Regional del Valle Cauca, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Vivienda, al Fondo de Adaptación, a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter), a la Unión Temporal Espacio Público Aguablanca, a la Curaduría Urbana 1 de Santiago de Cali, a la Curaduría Urbana 2 de Santiago de Cali, a la Curaduría Urbana 3 de Santiago de Cali, a Alianza Fiduciaria S.A., a la Constructora Enlace, a la Constructora IC Prefabricados, a Comfandi, al Comité de Planificación de la Comuna 13, a la Junta Administradora Local de la Comuna 13, a la Personería Distrital de Cali para Asuntos Ambientales y a la Procuraduría para Asuntos Ambientales.

10. En todo caso, el Despacho también requerirá a la parte demandante para que acredite, respecto de cada una de las entidades demandadas, el cumplimiento del requisito de procedibilidad de que trata el inciso final del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011⁴.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: INADMITIR la demanda por las razones expuestas en la parte motiva.

de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.

³ ARTÍCULO 8o. PROCEDIBILIDAD. (...)

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable ~~para el accionante~~, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

⁴ ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. (...)

Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00830-00
Medio de control: Protección de Derechos e Intereses Colectivos
Demandante: Juan Pablo Mosquera Mora
Demandados: Distrito de Santiago de Cali y otros
Inadmite

SEGUNDO: CONCEDER un término de 3 días a la parte actora para que atienda los requerimientos que se describen los párrafos 9 y 10 de esta providencia, so pena de rechazar la demanda parcialmente.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por estado a la parte demandante.

(Firmado electrónicamente por Samai)
PATRICIA FEUILLET PALOMARES
Magistrada